



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
D.C.

Bogotá D.C., primero (1º) de diciembre de dos mil veinte (2020)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2020-00322-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: **EDGAR RINCÓN GARCÍA**
DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- FIDUCIARIA LA PREVISORA Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ

En el presente asunto, se observa que el señor **EDGAR RINCÓN GARCÍA** a través de apoderada judicial promovió demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra de la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- FIDUCIARIA LA PREVISORA Y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ**, con el objeto de obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos:

- Nulidad parcial de la resolución parcial de la Resolución 11392 del 9 de noviembre de 2018, por medio de la cual se ajustó la pensión de jubilación y negó el reintegro y suspensión de los descuentos en salud en las mesadas adicionales de junio y diciembre.
- Nulidad de la resolución 11392 del 9 de noviembre de 2018, por medio de la cual resuelve un recurso reposición y revoca el acto administrativo recurrido.
- Nulidad del acto ficto presunto configurado por la falta de respuesta a la petición radicada ante la Fiduprevisora el 29 de julio de 2014, por medio de la cual solicitó el reintegro y suspensión de los descuentos en salud.

Ahora bien, este despacho observa que no es posible admitir la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

Como primera medida, la Ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagró en el Título V, todos los aspectos relacionados con los presupuestos procesales de admisibilidad de las demandas que se promuevan ante esta Jurisdicción.

Concretamente, el Capítulo III de la norma ibídem, en el artículo 162¹, consagra los requisitos que deben reunir las demandas.

1. De los actos administrativos demandados

En primer lugar, la parte actora solicita que se declare la **nulidad parcial de la resolución 11392 del 9 de noviembre de 2018**, sin embargo, una vez revisado el material probatorio aportado con la demanda, este Despacho Judicial da cuenta que dicho acto administrativo fue revocado en todas y cada una de sus partes por la Resolución 11555 del 30 de diciembre de 2019.

Para el Despacho resulta incongruente dicha pretensión, pues se debe tener en cuenta que se esta solicitando la nulidad parcial de una resolución que fue revocada en todas y cada de una de sus partes por un acto administrativo originado por el recurso de reposición elevado por la activa.

Debe destacarse, que la resolución **11392 del 9 de noviembre de 2018**, fue sustraída del mundo jurídico en virtud del recurso de reposición elevado por la activa contra dicho acto administrativo, por lo que no sería posible

“Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes.

2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.

3. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.

7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica”.

jurídicamente decretar la **nulidad parcial** de un acto administrativo que no se encuentra vigente para el ordenamiento jurídico.

En virtud de lo anterior, la Profesional del derecho deberá adecuar la primera pretensión.

A su turno, debe recordar la abogada de la parte actora, que estamos frente a una justicia rogada, por lo que deberá solicitar de manera adecuada la nulidad de la Resolución No. 11555 del 30 de diciembre de 2019, por medio de la cual resuelve un recurso de reposición en contra de la resolución 11392 del 9 de noviembre de 2018.

2. Del agotamiento de la reclamación administrativa.

El profesional del derecho, en las pretensiones de la demanda solicita el reconocimiento y pago de la prima de medio año de que trata el artículo 15 de la ley 91 de 1989; sin embargo, una vez revisado el plenario, éste Estrado Judicial echa de menos la petición radicada ante la entidad, solicitando en sede administrativa el reconocimiento y pago de dicha prestación, con el objeto de provocar un pronunciamiento de la Administración para que ésta, mediante el respectivo acto administrativo, fijara su posición en relación con el derecho cuyo otorgamiento se le demandan.

Esta actuación, que se enmarca dentro los pronunciamientos realizados por el H. Consejo de Estado², manifestando lo siguiente:

*“Como bien lo ha informado la doctrina y la jurisprudencia, la vía gubernativa constituye dentro de nuestro ordenamiento jurídico, requisito indispensable para poder demandar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto y el respectivo restablecimiento del derecho en sus diversas modalidades bajo la acción de nulidad subjetiva consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo; **lo anterior por cuanto por regla general la Administración Pública, a diferencia de los particulares, no puede ser llevada a juicio contencioso si previamente no se le ha solicitado por parte del administrado una decisión sobre la pretensión que se desean ventilar ante el Juez**³.*

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico el presupuesto de acceso a la vía judicial, también denominado doctrinariamente “decisión prealable” o decisión

² Consejo de Estado – Sección Segunda – Magistrado Ponente: Gustavo Gómez Aranguren – Expediente 08001-23-31-000-2011-00335-01 del 22 de marzo de 2015.

³ Betancur Jaramillo Carlos. Derecho procesal Administrativo. Quinta Edición. Pág. 170.

previa, surge a partir del momento en que el gobernado acude por escrito a elevar una pretensión de carácter subjetivo poniendo en marcha el aparato administrativo en procura de una respuesta, materializada en un acto administrativo que en muchas ocasiones basta para acceder a la vía judicial por disposición expresa del artículo 135 del C.C.A.

En ese orden de ideas, la vía gubernativa se torna en el instrumento de comunicación e interacción entre la Administración Pública y sus Gobernados cuando media un conflicto de intereses, erigiéndose, no solo como una forzosa antesala que debe transitar quien pretende resolver judicialmente un asunto de carácter particular y concreto, sino en un mecanismo de control previo al actuar de la Administración cuyo beneficio es de doble vía, pues constituye tanto la posibilidad de obtener en vía administrativa la satisfacción de una pretensión subjetiva como la oportunidad de ejercer un control de legalidad sobre las decisiones administrativas, a fin de que se tenga la oportunidad de revisar los puntos de hecho y de derecho frente a un asunto que posteriormente se ventilará dentro de un proceso judicial.

Por tanto, se entiende que el agotamiento efectivo de la vía gubernativa, no solamente lo compone la interposición de los recursos de ley sino el fiel contenido de la misma de acuerdo a la finalidad de su previsión legal, lo que implica la reclamación ante la administración de las pretensiones que posteriormente se ventilarán en sede judicial.”

Negrilla y subraya fuera de texto

En virtud de ello, se deberá allegar la prueba que demuestre que se elevó petición ante la administración solicitando lo pretendido a través de este medio de control, y con la cual se logre establecer que en efecto agotó el requisito de procedibilidad ante la entidad demandada, de conformidad con lo normado en el artículo 161, numeral 2 del C.P.A.C.A.

3. De la dirección de notificaciones judiciales

El artículo sexto del derecho 806 de 2020, señala:

“Artículo 6. Demanda. La demanda indicará el canal digital donde deben ser notificadas las partes, sus representantes y apoderados, los testigos, peritos y cualquier tercero que deba ser citado al proceso, so pena de su inadmisión. Asimismo, contendrá los anexos en medio electrónico, los cuales corresponderán a los enunciados y enumerados en la demanda”.

Sombreado y subraya fuera de texto

Por lo anterior, y al tenor de lo dispuesto en la norma *ibidem*, encuentra el Despacho que, en el ítem de notificaciones de la demanda, la apoderada judicial registró la misma dirección de correo electrónico tanto para ella como para el demandante, y en este sentido no se cumple a cabalidad con lo establecido en la norma antes endilgada.

Por ende, se deberá indicar el canal digital y/o correo electrónico de notificaciones, en donde el demandante, directa y efectivamente, podrán recibir notificaciones judiciales, sin que pueda ser la misma del apoderado.

Teniendo en cuenta lo anterior, en aplicación al artículo 8° de la norma antes señalada, el apoderado judicial deberá afirmar bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes.

Así las cosas, la demanda presentada por la apoderada judicial de la actora no será admitida hasta tanto no sea presentada en debida forma y bajo los lineamientos de la Ley 1437 del 2011, 1450 del 2011, 1564 del 2012 y decreto 806 de 2020, normas vigentes en materia Contenciosa Administrativa.

En virtud de lo anterior, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO. - INADMITIR LA DEMANDA instaurada por **EDGAR RINCÓN GARCÍA**, contra de la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO**.

SEGUNDO. - Como consecuencia de lo anterior, se concede a la parte demandante el término perentorio de diez (10) días, con el fin que subsane los defectos señalados en la parte motiva de este proveído, so pena de rechazarse la demanda, al tenor de lo dispuesto en el artículo 170 del C.P.A.C.A.

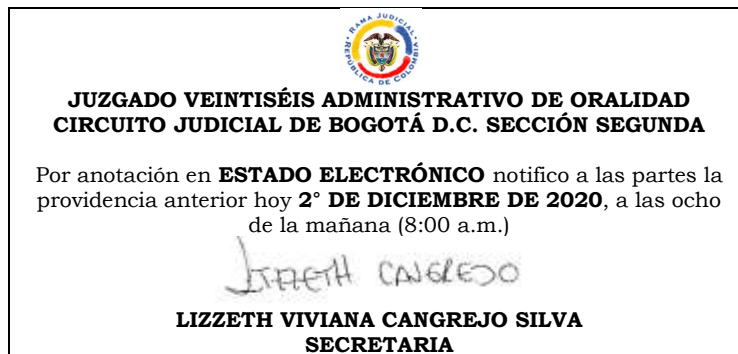
TERCERO. - Finalmente, es del caso señalar, que también se deberá acreditar el envío de la subsanación que se realice en los términos indicados

a lo largo de este proveído, a la entidad demandada a través de correo electrónico de notificaciones judiciales.

Sin embargo, de no conocerse el canal de digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

FV



Firmado Por:

ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-
CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

4d80b89bfa46abdbd92d5f4e3fc3230f53aed17bb04ef41819f53f50b084a9c1

Documento generado en 01/12/2020 01:59:53 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>